

¿Somos iguales ante la pandemia?

Gipuzkoako SOS Arrazakeria Peio Aierbe

Donostia, 29 de mayo de 2020

Pues, como todo, depende. Entre las consecuencias negativas ocasionadas por la actual pandemia están las que afectan a las condiciones de vida de la gente. Y como decía el cerdo en la novela de Orwell, todos somos iguales pero unos son más iguales que otros.

Se decretó el confinamiento para todas las personas. Pero nada tiene que ver el confinamiento para la clase media y alta de la sociedad, con viviendas espaciosas, e incluso chalets, con las condiciones habitacionales de los sectores empobrecidos.

Y no estamos hablando de pocas personas. El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España y en el País Vasco, presentado en noviembre de 2019 reporta que el 15,2% de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco está en situación de exclusión social. Hablamos de 334.000 personas. Y dentro de este grupo, 194.000 se encuentran en la exclusión más severa.

Una parte importante de ese segmento de población está formado por personas migrantes.

En lo que hace a la vivienda, el informe apunta a la existencia de 50.000 viviendas con situaciones de insalubridad y otros 25.000 hogares en los que se convive con situaciones de hacinamiento. Es obvio que el confinamiento para estos 75.000 hogares ha supuesto un sacrificio mucho mayor y unas consecuencias físicas y psicológicas importantes.

En el ámbito laboral, las consecuencias están siendo demoledoras para quienes tenían trabajos precarios y temporales. Una vez más, entre estos sectores encontramos sobrerrepresentada la población inmigrante. El cierre de la hostelería, el comercio, la construcción, buena parte del trabajo doméstico... ha golpeado a muchas personas que viven al día y que se han encontrado, de la noche a la mañana, sin recursos y sin un colchón de ahorro que les permitiera aguantar.

Esta falta de ingresos ha repercutido directamente en el pago de alquileres y en la compra de alimentos. Aunque haya una moratoria para no poder desahuciar por impago durante el confinamiento, son deudas que se van acumulando y que estallarán en unos meses echando a la gente a la calle. En lo que hace a las dificultades para adquirir alimentos, podemos ver en cualquier informativo las colas que por doquier se forman ante las entidades que los distribuyen.





En el ámbito de la enseñanza también aumenta la brecha de la desigualdad al no poder utilizar de igual manera las herramientas digitales que se vienen utilizando para compensar el cierre de los centros educativos. Hay muchos hogares que no tienen acceso a internet, que no tienen los ordenadores precisos. En muchos de ellos, la madre es la única al cargo de las criaturas y si conserva su puesto de trabajo (en la limpieza, como trabajadora de hogar...) no puede ayudarles en las tareas que exige esa enseñanza a distancia, por no hablar de la dificultad añadida que supone el aprendizaje de una lengua más, como es el caso del euskera.

Las personas que no tienen hogar y que venían malviviendo en la calle, en edificios deshabitados... no podían atenerse a la orden del #quédate en casa, por lo que las instituciones han habilitado recursos de urgencia para sacarlos de la calle. En algunos casos, son recursos adecuados (albergues...), en otros, en cambio, se les ha amontonado en polideportivos y frontones, que no reúnen los requisitos mínimos para poder ser atendidas en condiciones. En este perfil de personas sin techo, destaca también el colectivo inmigrante.

En definitiva, las personas migrantes conforman un porcentaje significativo de los sectores más vulnerables de esta sociedad para quienes las consecuencias de esta pandemia están siendo devastadoras, con un futuro aún más oscuro.

A esta situación se suma una legislación de extranjería que aboca a la irregularidad a miles de personas que no pueden optar a un puesto de trabajo en situación legal. Una legislación que promueve la economía irregular, terreno abonado para la explotación laboral y, en el caso de las mujeres, a situaciones de explotación sexual.

Por ese motivo, están en marcha diversas campañas impulsadas por numerosas entidades y colectivos en demanda de una regularización extraordinaria para las personas migrantes en situación irregular. Es por un lado un derecho humano básico, el poder buscarse la vida allá donde haya posibilidades, tanto para sí como para su familia. Es un recurso que en el pasado ha sido adoptado por gobiernos de todos los colores y que, hoy en día, vemos medidas en esa dirección en países de nuestro entorno como Italia y Portugal. Es incomprensible que un gobierno que se proclama de izquierdas no sea capaz de abordar una problemática suficientemente conocida, con una medida que está en sus manos dado que es una competencia de los Estados nacionales. La regularización no sólo supondría un alivio increíble en personas que tienen continuamente encima la espada de Damocles de la expulsión sino que, por añadidura, permitiría aflorar una economía sumergida mejorando las condiciones laborales de explotación a que se ven sometidas.

Muchas cosas van a cambiar como consecuencia del coronavirus. Y no pocas de ellas, a priori, van a precarizar aún más las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, entre ellos, una parte significativa de personas inmigrantes. Los políticos de todos los colores vienen repitiendo insistentemente un eslogan que les encanta "No dejaremos a nadie atrás". Para que no sea, una vez más, un slogan vacío hay que encarar la situación de las personas migrantes de manera distinta a lo que ocurre hoy en día. Han de ser consideradas personas en igualdad de derechos y deberes con las personas nacionales.

Si no se hace, si continúan engrosando las bolsas de pobreza y marginación, se estará allanando el camino de las propuestas xenófobas y racistas que hoy abandera VOX y, en buena medida, el Partido Popular. En situaciones de crisis, y esta es una de ellas, los problemas no





resueltos se enquistan y proporcionan munición para quienes abanderan propuestas ilusorias que hacen de las personas desfavorecidas el enemigo a batir.

En esta tarea la construcción de redes solidarias en los barrios y ciudades, que no discrimen entre vecinos y vecinas de aquí y de allá, que armen lazos de solidaridad y apoyo mutuo y exijan a las instituciones políticas sociales radicales son una de las claves que incidirán en que de la crisis salgamos reforzados o, por el contrario, con una sociedad aún más desigual.

